

**C**ooperar ampliamente en las investigaciones del "caso Letelier" es un deber que el Gobierno ha entendido como tal desde el primer momento. Enfrentar el problema de los presuntos desaparecidos es asimismo una obligación que debe tender a la solución más adecuada y completa posible, respecto de un problema complejo que incluye casos de muy diversa naturaleza y origen.

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro pueden oscurecer los verdaderos móviles de la agitación pública que últimamente se ha iniciado a este propósito, dentro y fuera de Chile. Tal finalidad, bajo la apariencia de informaciones sobre una investigación judicial o de atención humanitaria hacia personas que sufren, es claramente la de procurar el desprestigio y la desestabilización del Gobierno de nuestra Patria.

¿Puede alguien medianamente suspicaz dudar del montaje comunista de 60 huelgas de hambre que brotan simultáneamente en las más variadas latitudes del mundo, a las pocas horas de que igual fenómeno se inicia en nuestra capital? La vasta sincronización previa que ello supone, no permite atribuirle un origen diverso.

Por otro lado, la conducta equívoca del fiscal Propper y el carácter tendencioso de ciertas agencias internacionales, parecen orientados a crear una sensación de culpabilidad del Gobierno chileno en el "caso Letelier", sin que se adjunte ningún antecedente sólido y fundado que autorice deslizar tan grave impresión en la opinión pública nacional e internacional.

Dicha actitud se inscribe en un cuadro de peligrosos signos de intervencionismo imperialista en la política de los Estados Unidos hacia América Latina. Las declaraciones formuladas el sábado pasado por el embajador norteamericano en Bolivia, llevan el mismo sello de la insólita intromisión del Departamento de Estado en las recientes elecciones dominicanas, y dan cuenta de un sentido tutelar y misionero que se atribuyen algunos núcleos del Gobierno y el Congreso norteamericanos, en orden a la vigencia de determinadas fórmulas democráticas en América Latina, papel que nadie les ha conferido y que al menos Chile no está dispuesto a tolerar a su respecto.

Temer que se procure utilizar una inves-

## JAIME GUZMAN E.



## No confundirse

tigación judicial para afanes intervencionistas, no resulta, pues, infundado. La conducta hostil y discriminatoria hacia Chile de parte de esferas gubernativas y parlamentarias norteamericanas, tiene ya una bitácora larga y odiosa desde nuestra Liberación Nacional. Innecesario sería volver a reseñarla.

La elocuente reacción de defensa de nuestra dignidad soberana, expresada la semana pasada por el eminente académico Juan de Dios Vial Correa, revela que la indignación ante las pretensiones de la intervención foránea en Chile está extendiéndose hasta los sectores más serios y ponderados de nuestra comunidad nacional, en signo de una reacción tan vigorosa como indispensable. Sólo permanecen al margen de ella los reducidos grupos partidistas que esperan ser beneficiados por la presión internacional para sus particulares aspiraciones políticas, o quienes ingenuamente permiten que sus sentimientos humanitarios sean aprovechados con fines subalternos muy diferentes.

El Gobierno chileno está demostrando claridad y firmeza para enfrentar el desafío. Pero a ello se requiere sumar una presencia más patente y orgánica de la opi-

nión pública, que desenmascare a los aliados de la conjura foránea en sus verdaderos propósitos y en su condición abiertamente minoritaria, como quedara en evidencia el 4 de enero último.

Esa movilización cívica debe apoyarse en cuatro criterios básicos: 1. Ningún análisis moral serio del tema de los derechos humanos en Chile, a la hora de enjuiciar responsabilidades, puede prescindir de la situación objetiva de guerra civil en que se precipitó al país antes del 11 de septiembre, y que es la verdadera causa de la anormalidad jurídica en que hemos debido vivir estos años. Si bien ello no justifica eventuales excesos, impide que éstos le sean enrostrados sin más a un Gobierno que ha reconquistado la paz para nuestra Nación y que ha demostrado una clara evolución normalizadora, en contraste con el terrorismo predominante en el mundo, donde naufraga el elemental derecho humano a la propia seguridad.

2. La oposición externa e interna apunta como blanco predilecto a la persona del Presidente Pinochet, porque lo advierte como símbolo y pilar esencial del actual Régimen. Es por ello que, sin perjuicio de la naturaleza institucional de éste, su subsistencia y proyección exigen cohesionar hoy a la ciudadanía especialmente en el respaldo intransable al Presidente de la República.

3. No es admisible que la importancia y profundidad de la tarea en que el país está empeñado en el campo institucional, económico y social, aparezcan desdibujadas o subordinadas ante problemas específicos, que hagan perder la *visión de conjunto*, único prisma desde el cual los hechos sociales adquieren su justa dimensión. La superficialidad de cierto periodismo y la neurosis de algunas capas dirigentes, deben ceder paso a un enfoque más profundo, estable, y por ende válido, de nuestra auténtica realidad actual.

4. La tarea normalizadora y de institucionalización democrática, según el rumbo trazado, es el único camino de progreso efectivo para Chile. Estancarlo ante la agitación artificial sería tan perjudicial e injustificado como precipitarlo ante las presiones. Una u otra actitud implicaría caer en la trampa del adversario. Seguir por el mismo camino, con seguridad y convicción, surge como el imperativo que combina la soberanía y el éxito.

Esta es parte de la confesión de Michael Townley, llegada por el cable. En ella se agrega, según la misma fuente, que el norteamericano habría manifestado ser uno de los que fabricaron el artefacto explosivo junto a Virgilio Paz —también cubano— y el mismo José Suárez. El ayudante del fiscal, Eugene Propper, tendría entonces

en sus manos, si no al hecho material del asesinato mismo —Suárez sigue fugado—, por lo menos a quienes lo ayudaron directamente a preparar el crimen.

Todavía le resta sindicarse a los autores intelectuales, para cuya identidad no le bastaría las afirmaciones del propio Townley. Necesitaría de mayores pruebas.

Townley contó esta historia hace 20 días, y hasta el cierre de esta edición no había habido ninguna reacción oficial en torno al hecho.

Manuel Acuña, abogado de Townley en Chile, se extraña de la sorpresa causada por la información. Asegura que él se enteró de las confidencias de su representado